



Presidente del TDLC alerta por recortes presupuestarios: “El papel de Chile como referente en la región se ve reducido”

POR KAREN PEÑA

Por cuarta vez, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Nicolás Rojas, realizó la cuenta pública de la institución. Esto, en un contexto en el que enfrenta desafíos como la irrupción de la inteligencia artificial mientras lidia con un presupuesto reducido, así como cambios en la composición de la entidad por la renovación parcial tanto de dos de sus integrantes titulares como de dos de sus ministros suplentes.

En su exposición, el líder del TDLC alertó sobre el bajo presupuesto asignado al Tribunal. Detalló que en 2025 fue de \$ 2.801 millones y alcanzó una ejecución de un 99,9%, mientras que para este año alcanza \$ 2.859 millones, representando una reducción real del 1%.

“La situación presupuestaria es restrictiva. Los gastos distintos a personal han ido disminuyendo en el tiempo, de modo que la infraestructura y servicios para desarrollar la labor jurisdiccional se han precarizado”, advirtió.

Sumó la potencial reducción que se ha anunciado respecto de los montos otorgados para el Presupuesto 2026: “Tal situación nos golpearía en forma relevante, atendidas las escasas capacidades remanentes que quedan para cumplir las funciones legales o para hacer frente a imprevistos”.

Rojas explicó en su discurso que, en términos reales, el presupuesto del Tribunal es inferior al que le fuera asignado en 2019 bajo una realidad distinta en términos de número de casos, escritos presentados o de documentos acompañados.

Y sumó que a partir de ese año se han agregado a la institución nuevas funciones como las derivadas de la Ley REP y obligaciones como las

■ Nicolás Rojas criticó que las restricciones “se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia”.

asociadas al ingreso del TDLC al sistema Chile Compras durante el año anterior, todo lo cual impone “cargas administrativas relevantes”.

El presidente de la instancia recalcó que “las restricciones presupuestarias se han mantenido en el tiempo ya por tres gobiernos de distintos signos, poniendo en riesgo la fortaleza de la institucionalidad de defensa de la libre competencia”.

A raíz de ello el Tribunal ha tenido que tomar decisiones dolorosas: “A la eliminación de la unidad de estudios, la cual no alcanzó a consolidarse; se suma la imposibilidad de contar con medios tecnológicos para mejorar el servicio a nuestros usuarios o los procesos internos, junto a una reducción de los montos destinados a la mantención de equipos con el riesgo asociado a ello”.

Adicionalmente, dijo que se han

terminado los montos destinados a asesorías y, a la supresión de los viáticos –que ya tomó como medida el año anterior–, se añade la imposibilidad de asumir la representación de Chile ante las organizaciones internacionales de las que son parte, como la International Competition Network y la OCDE.

“El papel de Chile como referente en materia de competencia en la

“La oleada de juicios contra las grandes tecnológicas ya llegó a Chile”, dijo.

región se ve por lo mismo reducido”, admitió.

Y si bien dijo entender las restricciones que existen en materia de manejo fiscal, sinceró: “No deja de sorprendernos que una institución que representa un porcentaje ínfimo del presupuesto de la nación, que cuenta con un escaso número de funcionarios que opera en forma eficiente y que mediante sus decisiones permite un mejor funcionamiento de los mercados, lo que redundaría en más actividad económica, sufra un trato tan desventajoso por un período tan extendido”.

El desafío ante grandes tecnológicas

La semana pasada, cinco canales de televisión ingresaron una demanda ante el TDLC en contra de Alphabet, casa matriz de Google, en las que acusan a la multinacional de abuso de posición dominante en los mercados de los motores de búsqueda y de publicidad digital. Pero hay otras demandas previas contra el mismo actor.

Por eso, tras el encuentro, DF

preguntó cómo se ve desafiada la institucionalidad de la libre competencia en medio de la IA, pero también de la irrupción de grandes conglomerados. Rojas enfatizó que “la oleada de juicios contra las grandes tecnológicas ya llegó a Chile” y destacó que “la institucionalidad chilena desde el punto de vista sustantivo no tiene nada que envidiar a otras jurisdicciones más avanzadas en términos de recursos”.

Sin embargo, en términos de capacidades materiales, admitió que, en un contexto de presupuestos más restrictivos, todo ello “nos quita flexibilidad y capacidad de maniobra para poder enfrentar los desafíos de estos nuevos procesos de demandas más complejas, de actores que tienen un nivel de recursos muy superior al que podemos tener nosotros y de procedimientos que tienen también un volumen de información muy significativo”.

Según Rojas, son casos que tienen alguna diferencia incluso con los procesos grandes que se han visto antes en Chile, porque tienen un componente internacional. Por ejemplo, la mayoría de la documentación y los centros de decisión están afuera.

Añadió que existe una dificultad “procesal” relacionada a cómo acceder a pruebas que están en el extranjero o cómo lograr los testimonios necesarios.

Rojas advirtió que el mecanismo que se le aplica a los juicios de competencia está basado en el procedimiento civil de 1902, por lo que “tiene bastante poca flexibilidad para preguntas más complejas que involucran otras jurisdicciones”.

“El procedimiento chileno, como la forma en que está regulado, no había considerado la posibilidad de que 3/4 de la discusión tenga que darse en otro idioma y en otros países”, planteó.